

CAPITULO I  
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA  
U. A. M. L.

LIBRO SEXTO

DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS

CAPITULO I

DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS EN GENERAL, Y PRIMERO DEL DE COMPETENCIA

Se entiende por recursos extraordinarios aquellos que no se usan comunmente en los tribunales, como son los que hemos considerado hasta aquí, sino que tienen lugar fuera de los modos comunes de proceder: tales son los recursos de competencia, de fuerza y proteccion, de denegada apelacion, de nulidad y otros, de todos los cuales hablaremos por su orden, comenzando por el de competencia.

LIBRO SEXTO.

DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS.

CAPÍTULO I.

DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS EN GENERAL, Y PRIMERO DEL DE COMPETENCIA.

Se entiende por recursos extraordinarios aquellos que no se usan comunmente en los tribunales, como son los que hemos considerado hasta aquí, sino que tienen lugar fuera de los modos comunes de proceder: tales son los recursos de competencia, de fuerza y proteccion, de denegada apelacion, de nulidad y otros, de todos los cuales hablaremos por su orden, comenzando por el de competencia.

Se llama competencia la disputa que se suscita entre dos jueces acerca del conocimiento de un negocio. De varias maneras puede comenzar esta disputa sobre jurisdiccion: á veces sucede que uno de los litigantes que sigue negocios ante un juez ordinario, opone á este la declinatoria diciéndole que se abstenga de conocer en el asunto, por tales ó cuales razones que arguyen incompetencia; y si el juez, á pesar de estas razones, se declara competente, acude la parte desairada al otro juez que ella cree debe conocer del negocio, y le suplica por medio de un escrito, que inhíba al juez anterior del conocimiento del asunto, y que le anuncie la competencia por si resiste, siendo este el modo mas frecuente de entablarse el recur-

so de competencia. Pero tambien sucede á veces que el juez mismo, sin peticion de parte, entabla de oficio la competencia con otro juez, por creer que le ha usurpado su jurisdiccion, como cuando un juez envia exhorto á lugar distante para que se embarguen bienes, por ejemplo, y el juez requerido encuentra que no toca al requerente el decretar aquel embargo, porque el dueño de los bienes no es del fuero del requerente, sino del juez requerido.

De cualquiera manera que sea, entablada así la disputa, el juez inhibido, si hay parte interesada, le corre traslado del oficio inhibitorio, en que se insertará la peticion de la otra parte que solicita la inhibicion. Contesta el traslado la parte dentro del término de tres dias, apoyando, por lo comun, la jurisdiccion del juez inhibido, y pidiendo se acepte la competencia. El juez inhibido pone entonces un oficio, contestacion al que le inhibió, transcribiendo allí el escrito de su parte y diciendo que acepta la competencia y que va á remitir sus actuaciones al próximo superior; y si la parte que estaba antes á favor de la jurisdiccion del juez inhibido, desiste de la competencia temiendo nuevas dilaciones ó por otros motivos, lo dirá así en su escrito de contestacion al traslado del oficio inhibitorio y escrito de la contraria, y el juez inhibido desistirá, si le parece bien, del conocimiento del negocio, remitiendo sus actuaciones al que le inhibió, ó seguirá la competencia de oficio.

En caso de llevarse adelante la competencia, los jueces que disputan remitirán sus actuaciones al próximo superior para que la dirima, exponiendo cada cual en un informe las razones en que se funda. (Art. 11 del decreto de 19 de Abril de 1813, y art. 185 de la ley de 29 de Noviembre de 1858.)

Si la disputa fuere entre jueces de un mismo territorio y fuero, la decidirá su tribunal superior respectivo (Art. 160 de la Constitucion federal), y si fuere entre jueces de distintos territorios ó diversos fueros, la decidirá la Suprema Corte de justicia. (Art. 137 de la misma.) Esto es en general; y ahora en particular, en cuanto á la autoridad á quien corresponde el conocimiento de los recursos de competencia, la ley de 29 de Noviembre de 1858 está de acuerdo con las antiguas sobre la materia, y dispone lo siguiente:

«Art. 192. Corresponde al supremo tribunal en su primera sala dirimir las competencias:

I. De sus otras salas entre sí ó con otros tribunales ó juzgados comunes ó especiales.

II. Las que se ofrecieren entre las salas de un tribunal superior, comun ó especial.

III. Las de los tribunales superiores comunes entre sí ó con los tribunales especiales, y la de estos y aquellos con los jueces comunes ó especiales.

IV. Las de los tribunales superiores comunes con los jueces ordinarios de diverso territorio judicial y entre jueces ordinarios ó locales de territorios diferentes; ó de uno mismo en el caso que la apelacion corresponda al tribunal supremo.

V. Las de los tribunales superiores comunes con los tribunales de primera instancia ó juzgados especiales de la misma instancia, cuyas apelaciones correspondan al supremo tribunal ó á un tribunal del fuero comun.

VI. Las de los juzgados especiales entre sí, cuyas apelaciones correspondan á diversos tribunales superiores.

VII. Las de los tribunales ó juzgados que ejerzan diversa especie de jurisdiccion, ó aun cuando sea la misma, no tengan un mismo tribunal superior que pueda decidir la competencia.

«Art. 193. Entre la jurisdiccion ordinaria y eclesiástica no cabe competencia, sino el recurso ordinario de fuerza en conocer y proceder.

«Art. 194. Pertenece á los tribunales superiores comunes y especiales de la nacion, dirimir respectivamente las competencias entre todos los jueces subalternos de sus respectivos territorios.

«Art. 195. Son jueces subalternos de los tribunales comunes, no solamente los ordinarios, sino tambien los de los tribunales especiales, creados ó que se crearen para conocer en primera instancia de determinados negocios, y cuyas apelaciones correspondan á los mismos tribunales.

«Art. 196. Los tribunales superiores comunes decidirán tambien las competencias que se susciten entre los jueces locales de diversos partidos pertenecientes al territorio del tribunal, en las conciliaciones y juicios verbales. Estas compe-

tencias se decidirán de plano, y en el término y forma que prescribe el art. 198.

«Art. 197. Las competencias de los jueces locales en las conciliaciones y juicios verbales, se decidirán por los jueces de primera instancia, en el término que previene el artículo siguiente.

«Art. 198. El juez respectivo del partido, en el caso del artículo anterior, decidirá la competencia de plano, con solo la vista de los oficios que le remitirá cada uno de los contendientes, en que le expondrá las razones en que se funden, y les comunicará su resolución motivada, dentro de tercero día á mas tardar, en un simple oficio, para que á virtud de ella conozca aquel á cuyo favor sea la decisión.

«Art. 199. Las competencias de los jueces de primera instancia en los juicios verbales de que pueden conocer, se decidirán en juicio verbal en el término de seis días, levantando una acta y comunicando inmediatamente su resolución en un simple oficio al juez que deba conocer.

«Art. 200. Remitidos los autos al tribunal ó juez que corresponda decidir la competencia, si los litigantes desistieren de sostener las respectivas jurisdicciones y los jueces nada dijeren, continuará el juicio hasta su conclusion. Lo mismo se verificará en el caso en que desistiéndose los jueces competidores, insistieren las partes en que se decida la competencia. Si los jueces y las partes se desistieren, se abstendrán de conocer, remitiendo las actuaciones al juez que corresponda.»

En cuanto á los procedimientos para la decision del recurso de competencia, ademas de los expresados, tienen lugar los siguientes:

Recibidos los autos y los informes de los jueces por el tribunal respectivo, se señala día para la vista, con citacion del fiscal, y con los informes de las partes si el tribunal los creyere necesarios, y se pronunciará el fallo dentro de los quince días siguientes. Nunca se entregarán los autos á las partes, pero estarán de manifiesto en la secretaría para que cada una de ellas los vea y saque las copias y apuntes que le convengan.

Entablada y pendiente la competencia, no se puede proceder adelante, ni innovar en el negocio sin cometer atentado y perder por el mismo acto cualquier derecho que se pudiera

tener al conocimiento del pleito (L. 8, tít. 9, lib. 5 de la Recopilacion de Ind.); y si la competencia se hubiere promovido y sostenido contra ley expresa y terminante, incurrirá el juez en la pena que señala el art. 7 de la ley de 24 de Marzo de 1813, debiendo imponérsela el tribunal que la dirima, ejecutándola irremisiblemente desde luego, sin perjuicio de oír despues al juez si reclamare. (Art. 6 del decreto de 11 de Setiembre de 1820.) El art. 190 y 191 de la ley de 29 de Noviembre de 1858, dice lo siguiente de conformidad con las leyes anteriormente citadas:

«El tribunal ó juez que promueva ó sostenga una competencia contra ley expresa y terminante, incurrirá en la pena de suspension de empleo y sueldo por un año, y pagará las costas y perjuicios que se siguieren. Si aun cuando no fuere contra la ley expresa, la promoviere ó sostuviere contra derecho, á juicio del juez ó tribunal que la decida, pagará las costas y perjuicios que hubiere causado. El tribunal, al decidir las competencias, así en causa civil como criminal, hará en su caso efectiva la pena impuesta en el artículo anterior, ejecutándola irremisiblemente desde luego, sin perjuicio de que despues se oiga al juez ó magistrado que la sufra, si reclamare.»

Por lo dicho constan claramente los trámites que deben seguirse en el recurso de competencia, y que son bien sencillos.

Si quiere verse mas sobre competencia de jurisdiccion, acúdate al capítulo que habla del fuero competente.

## CAPÍTULO II.

### DE LOS RECURSOS DE FUERZA Y PROTECCION.

«El recurso de fuerza es la queja suplicatoria que se hace á la autoridad civil implorando su auxilio ó proteccion contra un juez eclesiástico que, ó conoce de un asunto que no le corresponde, ó aunque le corresponda, conoce de una manera impropia é ilegítima, ó que no concede las apelaciones admitidas por los cánones.

El origen de los recursos de fuerza en España es tan antiguo como la monarquía, y así lo reconoce la ley 1, tít. 2, lib. 2 de la Novísima, que dice ser «de antigua costumbre, aprobada, usada y guardada;» y contra su práctica y libre uso no se puede admitir bula ni breve (L. 22, tít. 2, lib. 2 de la N.), pues se funda en la obligación que la autoridad civil tiene de impedir se inferan injurias, fuerza ó violencia á ninguno de los que viven en la sociedad que ella gobierna, y de velar sobre que los jueces eclesiásticos no se excedan en el ejercicio de la jurisdicción que les concede el derecho canónico y les apoya el civil. De manera que estos recursos de fuerza, hablando en general, sirven para corregir los abusos que cometan los jueces eclesiásticos en el ejercicio de su jurisdicción. Y como la jurisdicción es de dos maneras, voluntaria y contenciosa, hay en primer lugar dos clases de recursos, á saber: el de fuerza si la queja se refiere á lo contencioso, y el de protección si se refiere á la jurisdicción voluntaria; pero la diferencia viene á ser casi nominal, porque el de protección se convierte en recurso de fuerza desde el momento que se intenta.

De la definición que di al principio se infiere que hay tres clases de recursos de fuerza: en el conocer y proceder, cuando el juez eclesiástico conoce de un asunto que no toca á su jurisdicción: en el modo de conocer y proceder, cuando dicho juez eclesiástico falta á las leyes que arreglan los trámites del juicio; y en el de no otorgar, cuando niega las apelaciones que conceden los cánones.

Como dijimos en el libro primero de esta obra al hablar de las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia, la primera sala es la autoridad que conoce de los recursos de fuerza y protección de los MM. RR. arzobispos y RR. obispos, provisoros, vicarios generales y jueces eclesiásticos de la nación, y ante dicha primera sala debe ponerse la queja suplicatoria contra el juez eclesiástico que abusa de su jurisdicción. (Art. 192 de la última ley de 29 de Noviembre de 1858.)

Acercas de la manera de proceder en estos recursos, diremos que es bien sencilla, y que consiste ante todo en prepararlos, pues aunque la preparación no sea absolutamente indispensable, y menos en el de conocer y proceder, en la práctica, sin

embargo, se preparan todos, aunque sea solo por consideracion y política que merece el juez eclesiástico. La preparación consiste en advertir al juez eclesiástico que si no desiste del conocimiento de un negocio que no le corresponde, ó si no revoca por contrario imperio tal auto en que se falta á las leyes del proceso, ó en que se niega una apelacion concedida por los cánones (segun sea el caso), se hará uso del recurso de fuerza. De manera que esta preparación es una mera política, y no toca á la esencia de la sustanciacion de este recurso. La preparación de estos recursos puede hacerse, ó en un escrito aparte, y esto es lo mas conveniente y respetuoso, ó por medio de una comparecencia, ó al contestar una notificacion. Hé aquí un ejemplo de escrito preparatorio de un recurso de fuerza en el conocer y proceder.

Señor provisor (ó el juez eclesiástico que fuere): Fulano, ante V. S., etc., digo: que por el traslado que se me ha corrido de tal demanda, ó por tal y cual circunstancia, veo que está ante el juzgado del muy digno cargo de V. S. el negocio tal y cual; y como por las leyes y razones tales y cuales, que son de gran peso, y que sin duda no se han tenido presentes por motivos involuntarios, el conocimiento de este negocio toca exclusivamente al juez tal y cual, en virtud de la ley y doctrinas citadas: á vd. suplico, que atendidos estos sólidos fundamentos, se sirva inhibirse del conocimiento de este negocio, pasando los autos al juez competente y evitándose la instauracion de un recurso de fuerza que me veria en el caso de intentar á pesar mio, por los respetos que merece la autoridad eclesiástica á quien me dirijo. No dudo que la ilustracion de ese respetable juzgado calificará debidamente estas razones; y por tanto,

A V. S. suplico se sirva proveer como pido, etc.

El escrito de preparación en los recursos de fuerza, en el modo de conocer y proceder y en el de no otorgar, dirá poco mas ó menos:

Señor provisor (ó el juez eclesiástico que fuere): Fulano, en el negocio tal y cual, supuesto su estado de haberse hecho tal cosa, ante V. S., etc., digo: que por las leyes y razones tales y cuales, se han alterado ó violado las leyes del proceso en este negocio cuando se mandó ó se hizo tal y cual cosa (si el recurso es en el modo de conocer y proceder), ó que en el hecho de negárseme por auto de tal fecha la apelacion que me conceden tal y cual canon (si el recurso es de no otorgar), se me hace injusticia que no se ocultará á la ilus-

tracion de V. S.; y por lo mismo, pido respetuosamente á ese digno juzgado se sirva revocar por contrario imperio el auto tal, en que se da tal trámite ó se me niega la apelacion, pues me seria doloroso tener que intentar, aun á pesar mio, el recurso de fuerza que en el caso me conceden las leyes. Por tanto,

A V. S. suplico, etc.

Presentados estos escritos, segun el caso, ya no se acostumbra en la práctica repetirlos, salvo una extraordinaria deferencia de que es muy digna la autoridad eclesiástica, y de que nosotros aconsejamos usen los estudiantes que nos leen, cuando se les ofrezca la ocasion.

Si el juez eclesiástico no desiste del conocimiento del negocio (si se trata del recurso en el conocer y proceder), ó si no revoca el auto en que deba tal y cual trámite contra las leyes del proceso (si se trata del recurso en el modo de conocer y proceder), ó en que niega la apelacion concedida por los cánones ó leyes (si se trata del recurso en no otorgar), entonces, en cualquiera de estos casos, la parte que se cree agraviada pondrá un escrito dirigido á la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, diciendo poco mas ó menos lo siguiente:

Exmo. Sr.—Fulano de tal, ante V. E., etc., digo: que en el juzgado eclesiástico de esta diócesis se me ha principiado indebidamente causa criminal por tal delito sin estar subordinado á aquella jurisdiccion, ó se están siguiendo autos sobre tal cosa, á pesar de ser de naturaleza profana y sujeta á la jurisdiccion comun;—ó se ha faltado manifestamente á las leyes que arreglan el proceso, por haberse dado sentencia sin previa citacion, —ó no se me ha concedido de tal sentencia la apelacion que conceden tales cánones; y aunque he propuesto (en el primer caso) en toda forma el artículo de inhibicion y he protestado que haria uso del recurso de fuerza para el caso de no abstenerse el juez eclesiástico del conocimiento de dicho asunto;—ó habiendo prevenido que haria uso del recurso de fuerza si no revocaba tal auto en que se faltó á las leyes del proceso, ó se negó una apelacion que conceden tales cánones (para los otros dos casos), —se ha negado á ello (para los tres casos), y continúa conociendo como si fuera competente (solo para el primero); y á fin de que se alce esta fuerza y se repare el agravio que comete dicha jurisdiccion (fórmula general), suplico á V. E. se sirva admitirme este recurso, mandando se despache la provision ordinaria para la remision de los autos íntegros y originales, y en su vista declarar que el juez eclesiástico comete notoria fuerza en el conocer y pro-

ceder, pasándose los autos al juez secular competente (si se trata del recurso en el conocer y proceder), —ó que el notario eclesiástico nombre representante que dé cuenta con los autos para que se vea cómo se ha faltado á las leyes del proceso, ó se me ha negado tal apelacion que me conceden los cánones (si el recurso es en el modo ó en no otorgar). Por tanto,

A V. E. suplico, etc.

Si el recurso de fuerza es en el conocer y proceder, la sala decreta la provision ordinaria, que es bien sencilla, y dice: «Despáchese la provision ordinaria.» En este decreto tan laconico se comprende todo lo que los autores y las leyes dicen sobre la remision de los autos principales, el alzamiento de las censuras por la autoridad eclesiástica, si las habia, y la citacion á esta misma autoridad para que nombre representante que vaya á informar. Así es que, hecho saber este auto al juez eclesiástico que conocia del negocio en cuestion, remite desde luego los autos originales, levantando las censuras si las hubiere; y en cuanto al representante que vaya á informar, designará uno de los dos promotores de la curia eclesiástica de México, si el recurso es contra el arzobispo de México, ó nombrará el representante que le parezca si el recurso viniere de otra parte y no haya persona designada de antemano. Venidos los autos á la primera sala de la Corte de Justicia, se pasan al fiscal, por estar interesada la jurisdiccion en este recurso en conocer y proceder de que vamos hablando; se citan autos con extracto y citacion; se pasan los autos á los interesados para el cotejo, y se señala dia para la vista. Verificada la vista en el dia señalado, y oidos los informes si los hubiere, y en que hablarán el patrono del actor, el fiscal que defiende la jurisdiccion ordinaria, el representante de la curia eclesiástica, el abogado de la otra parte interesada si quisiere, se fallará dentro de quince dias si el juez eclesiástico hace ó no fuerza en el conocer y proceder; y una vez declarado que hace fuerza, se remitirán los autos al juez competente para que se sigan ante él.

Si el recurso de fuerza es en el modo de conocer y proceder, ó en no otorgar, entonces el auto de la primera sala de la Corte de Justicia dirá así: «Notifíquese al notario eclesiástico de estos autos mande representante que dé cuenta con

ellos para tal dia.» En estos dos recursos no interviene el fiscal, porque no se interesa la jurisdiccion, sino que con la relacion de los autos que hará la persona designada por el juzgado eclesiástico, que nombra por lo regular un escribano, y con los informes de las partes y audiencia del representante de la curia eclesiástica, se declara si el juez eclesiástico hace ó no fuerza en el modo de conocer y proceder ó en el no otorgar.

Los autores distinguen los autos que declaran si hay ó no la fuerza, en medios, condicionales y mixtos, segun que declaran terminantemente que el juez eclesiástico hace ó no fuerza, ó segun que hacen condicional esta declaracion, ó que la hacen de un modo ambiguo. La práctica en México consiste en que cuando se trata del recurso de fuerza en el conocer y proceder, se declara terminantemente, y sin condicion, si el juez eclesiástico hace ó no la fuerza; y cuando se trata del recurso en el modo de conocer y proceder y en el de no otorgar, si no hay fuerza, se declara así terminantemente, y si la hay, suele usarse, aunque no es lo comun, del auto condicional, diciéndose que en virtud de tales y cuales leyes y fundamentos, el juez eclesiástico, haciendo tal y cual cosa, hace fuerza, ó en el modo de conocer y proceder, ó en el no otorgar la apelacion.

Tambien disputan los autores si puede apelarse del auto en que se declara sobre la fuerza, diciendo los que llevan la afirmativa que es un auto verdadero, y los contrarios que es meramente una aclaracion; pero lo que importa saber es que en nuestra práctica no se admite apelacion, y el recurso no tiene mas que una instancia en la primera sala de la Suprema Corte.

El recurso de proteccion es el que intentan los clérigos, pidiendo á la autoridad civil que los proteja contra tal y cual abuso que comete la jurisdiccion eclesiástica contra ellos, ya en la concesion ó suspension de sus beneficios, ó en cualquiera otra cosa que sea de jurisdiccion voluntaria. Pero, como dijimos antes, en el momento en que se intenta este recurso se convierte en el de fuerza, siguiendo los mismos trámites absolutamente.

### CAPÍTULO III.

#### DE LOS RECURSOS DE DENEGADA APELACION, SUPLICACION Y NULIDAD.

Por la ley de 18 de Marzo de 1846, se establece que cuando las partes que litigan se crean agraviadas por la denegacion de apelacion ó suplicacion, pidan al juez que conozca del negocio, un certificado de haberles negado estos recursos, en el acto de la notificacion si quisieren hacerlo de palabra, ó en el término de tres dias si lo piden por escrito, y el juez fuere de primera instancia, ó dentro de dos si fuere el de segunda. El juez á quien se pida, dentro de igual término, extenderá dicho certificado, en el que dará una idea clara del negocio, insertará el auto de que se haya apelado ó suplicado, y en el que haya negado estos recursos. Con esta constancia se presentará el interesado al tribunal que debia conocer de la apelacion, dentro de tres dias, ó dentro del término que el juez le haya designado si estuviere en otro lugar dicho tribunal superior. Este conocerá sumariamente, y si el juicio fuere ordinario y la sentencia definitiva ó interlocutoria con gravámen irreparable, librárá su despacho para que se le remitan los autos originales; mas si apareciere que la sentencia no es de esta clase, solo exigirá la remision en testimonio de las constancias que señalaren las partes como conducentes, sin perjuicio de que el juez inferior continúe bajo su responsabilidad los procedimientos del juicio.

En los juicios ejecutivos y en todos los sumarios, antes de ejecutarse la sentencia definitiva no se remitirán los autos originales, sino el testimonio de que se ha hablado; pero sí podrá exigirse la remision de los autos originales, ejecutada dicha sentencia. El tribunal, con presencia de estos ó del testimonio, dentro de quince dias si el recurso fué de denegada apelacion, ó dentro de ocho si fuere de denegada suplicacion, fallará si estuvieren ó no bien negados estos recursos, sin fallar nada en lo principal, si no fuere de consentimiento de los interesados.

Quando se niegue el recurso de nulidad, se ocurrirá á la sala que debe conocer de él, y en todo se procederá como en los recursos de denegada apelacion ó suplicacion. (Art. 441 de la ley de 29 de Noviembre de 1858.)

#### CAPÍTULO IV.

##### DEL RECURSO DE ACLARACION DE LA SENTENCIA.

Hemos dicho en otra parte de esta obra, que cuando la sentencia está oscura, se puede pedir al mismo juez que la dió una aclaracion de ella, y los procedimientos de este recurso están detallados con arreglo á las leyes y práctica antiguas, por la ley de 29 de Noviembre de 1858, que en sus artículos del 424 al 432, dice lo siguiente:

«El recurso de aclaracion solo podrá interponerse cuando la parte resolutive de la sentencia definitiva ó interlocutoria, con fuerza de tal, fuere contradictoria, ambigua, ú oscura en sus cláusulas ó palabras.

«El recurso se interpondrá ante el mismo juzgado ó tribunal que hubiere dictado la sentencia, dentro del término fatal de tres dias, contados desde la fecha de la notificacion hecha al que pida la aclaracion.

«El recurso se interpondrá precisamente por escrito, en el cual se exprese claramente la contradiccion, ambigüedad ú oscuridad de la cláusula ó palabra cuya aclaracion se solicita.

«De este escrito se correrá traslado á las otras partes por el término igualmente fatal de tres dias á cada una, y en vista de lo que expongan sin otro trámite, el juez ó tribunal, lo mas tarde el tercer dia de entregado el último escrito, dictará la providencia que corresponda, aclarando la sentencia ó determinando no haber lugar á la aclaracion solicitada.

«El juez ó tribunal, al declarar las cláusulas ó palabras contradictorias, ambiguas ú oscuras de la sentencia, lo hará sin poder variar en el fondo lo dispuesto en la misma sentencia.

«La providencia que recaiga se notificará á las partes, y

de la que se dicte, ya sea la de aclaracion ó la de que no ha lugar á ella, no se admitirá ningun recurso, ni se podrá pedir nueva aclaracion.

«De la sentencia una vez aclarada, tampoco podrá pedirse nueva aclaracion.

«Una vez interpuesto el recurso de aclaracion, se suspenderá el término para apelar ó suplicar de la sentencia, si fuere apelable ó suplicable, el que comenzará á correr desde el dia que se haga la notificacion de la providencia á la parte que tenga el derecho de apelar.

«La providencia que aclare la sentencia, se reputará una misma con la sentencia aclarada para el efecto de la apelacion ó súplica.

«Siempre que los jueces y tribunales declaren no haber lugar á la aclaracion que se pide, y juzgaren que el recurso se ha interpuesto maliciosamente, condenarán al que la solicitó en las costas del recurso, y le impondrán una multa hasta de cien pesos.»

#### CAPÍTULO V.

##### DEL RECURSO DE NULIDAD.

El recurso de nulidad es el remedio que se intenta en los juicios cuando se han violado las leyes del proceso, para que se repongan las cosas á su primer estado, y exigir la responsabilidad al juez que conoció del negocio. Este recurso está arreglado por la ley de 23 de Mayo de 1837, y por la de 29 de Noviembre de 1858.

Los recursos de nulidad solo se interpondrán en juicio civil escrito, de sentencia definitiva que cause ejecutoria, dentro del preciso término de ocho dias, contados desde el en que se notifique aquella, y solo cuando en la misma instancia en que se ejecutorió el negocio se hayan violado las leyes que arreglan el procedimiento en los casos siguientes:

I. Por falta de emplazamiento en tiempo y forma, y falta absoluta de audiencia de los que litiguen, comprendiéndose entre ellos al fiscal en su caso.

II. Por falta de personalidad ó poder suficiente de los litigantes para comparecer en juicio.

III. Por falta de citacion para recibir las pruebas ó para practicar cualquiera diligencia probatoria.

IV. Por no haber recibido el pleito á prueba, debiendo recibirse, ó no haberse permitido á las partes hacer la prueba que pretendian en el término legal, no siendo opuesta á derecho.

V. Por no haber mostrado conforme á derecho á las partes algunos documentos ó piezas de los autos, de manera que no hayan podido alegar sobre ellos.

VI. Por no haberse notificado en forma el auto de prueba, ó no haberse citado para sentencia definitiva.

VII. Por incompetencia de jurisdiccion, si se alegó oportunamente.

En todos los casos en que por falta de citacion ha lugar á la interposicion del recurso, conforme á lo dicho anteriormente, no podrá interponerse cuando la parte no citada haya comparecido en tiempo oportuno voluntariamente, y héchose oír.

Cualquiera de las nulidades expresadas en los negocios cuya sentencia no cause ejecutoria, se reclamará en la instancia siguiente por via de agravio.

Para que proceda el recurso en los casos de que tratan los artículos anteriores, será necesario que la violacion haya ocurrido en la instancia en que se ejecutorió el negocio, y que pudiendo hacerlo, se haya reclamado formal y expresamente antes que recayese sentencia en la instancia respectiva, y que la reclamacion no haya surtido efecto.

El recurso se calificará por el tribunal ó juez que causó la ejecutoria, y admitido sin otro requisito, dispondrá que la sentencia se lleve á efecto, dándose por la parte que hubiere obtenido fianza de estar á las resultas si se mandare reponer el proceso, y remitirá los autos al tribunal que deba conocer de la nulidad, con citacion de los interesados.

Declarada la nulidad se devolverán los autos al tribunal *a quo*, para que reponiendo el proceso al estado que tenia antes de cometerse la nulidad, lo sustancie y determine con arreglo á las leyes.

Estos recursos se sustanciarán con un escrito de cada parte, audiencia del fiscal é informes á la vista si los pidieren. (Arts. 43, 46 y 53 de la ley de 23 de Mayo de 1837; arts. del 434 al 440 de la ley de 29 de Noviembre citada.)

En el caso de negarse el expresado recurso, tendrá lugar el concedido en la ley de 18 de Marzo de 1840, observándose los trámites que ya dijimos.

FIN DE ESTA OBRA.